

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email: cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO: 151

FECHA: 3 de Septiembre de 2012

BOLIVIA

BOLIVIA ANTES Y DESPUÉS DE EVO

En Bolivia una exigua minoría opulenta oprimía y negaba sus derechos humanos básicos a aimaras, quechuas, guaraníes y otros pueblos originarios que forman la mayor parte de la población. Mucho menos les reconocía sus derechos colectivos a la identidad cultural, la autonomía y el territorio. El 90 por ciento de la población rural vivía en la pobreza y el país disputaba a Haití y Honduras el peor desempeño en la región por su índice de desarrollo humano. Las empresas públicas creadas por la revolución de 1952 fueron privatizadas a precio de remate en cumplimiento de las directivas del Consenso de Washington mediante disposiciones anticonstitucionales y escandalosos negocios armados entre la oligarquía y las transnacionales. Valga este ejemplo para ilustrar el saqueo: sólo el presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97; 2002-03) hizo una fortuna superior a los 250 millones de dólares a expensas de las privatizaciones, del desempleo ocasionado por estas a decenas de miles de trabajadores, de la entrega de los recursos naturales y la soberanía nacional y la sangrienta represión contra los movimientos que rechazaban estas políticas.

Sánchez de Lozada y su sucesor fueron derrocados por rebeliones de los pueblos indios e interculturales, que en 2005 lograron alzar a la presidencia a uno de los suyos, el aimara Evo Morales, con un alud de votos. Entonces se inició la profunda transformación social que vive hoy Bolivia. ¿Quién podía imaginar entonces los extraordinarios logros conseguidos en los siete años transcurridos hasta la actualidad?

Los pueblos de Bolivia, ya con el timón del gobierno en sus manos, iniciaron el rescate de la independencia, la soberanía y el desarrollo de una política exterior independiente, de unidad e integración latinocaribeña y de solidaridad con los pueblos de la región y con todos los que bregan por un mundo mejor. Desafiando los ataques de la oligarquía y del imperialismo Evo luchó a brazo partido por convertir en realidad las demandas de los movimientos indígenas y populares. Convocó a la Asamblea Constituyente, reclamo muy sentido de los pueblos originarios que permitió proclamar la nueva Constitución y el nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia, enterrar la República oligárquica y con aquella arma jurídica acometer el rescate de los recursos naturales, las empresas privatizadas y redoblar la larga lucha por la descolonización y la transformación de las conciencias en lo que ha sido calificado acertadamente por el líder boliviano como la Revolución Democrática y Cultural.

En siete años Bolivia erradicó el analfabetismo, su economía ha crecido a un promedio del 4.7 por ciento anual, casi sextuplicó sus reservas internacionales de divisas, duplicó el PIB por habitante y dejó de ser aquel Estado mendicante, calificado de fallido, que dependía de la ayuda internacional hasta para pagar a sus empleados públicos, conquistas de las que no pueden presumir muchos países en medio de la megacrisis económica internacional. Extendió considerablemente los servicios de salud a millones que no los recibían y abrió miles de escuelas. Es un prestigioso miembro de la Alba y Unasur y seguramente pronto ingresará al Mercosur, un paso que añadirá fortaleza geopolítica a la aportada por Venezuela a ese bloque de formidable proyección internacional pues Bolivia, sin contar sus recursos energéticos, mineros y de biodiversidad, goza de una ubicación geográfica crucial en el área.

No es fortuito que el gobierno de Bush hiciera todo lo posible por impedir la llegada de Evo a la presidencia ni que Washington, también con Obama, haya mantenido una persistente política subversiva para derrocarlo al extremo de que el estado mayor de la contrarrevolución radique en la representación diplomática yanqui en La Paz. Estados Unidos ha ido modificando sus tácticas subversivas en la medida que le fracasan una tras otra. Últimamente ha recurrido a estimular y hacer ruido mediático con demandas de sectores populares, entre ellos el tema del Tipnis, cuyos dirigentes defienden intereses particulares y ahora se oponen al referendo que decidirá sobre la carretera propuesta por el gobierno ya que saben que la abrumadora mayoría de la población del territorio indígena en cuestión la apoyará. Bolivia brilla con el liderazgo de Evo antes los pueblos indios y no indios como un faro de dignidad y construcción nacional en armonía con la naturaleza, tema en el cual es líder mundial.

Fuente: Ángel Guerra Cabrera. Rebelión

EN MEDIO DEL ASEDIO, LA REVOLUCIÓN BOLIVIANA AVANZA

Los dos años y medio del primer mandato del presidente Evo Morales bajo la nueva Constitución Política del Estado han concluido con un saldo favorable para una revolución cuya período político de transición –en la que se irán construyendo las base materiales y subjetiva de la nueva sociedad- anticipa ser más largo del inicialmente pensando.

Los problemas que se enfrentan tienen relación más con la interpretación y la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado que con una interpelación o rechazo al proceso de cambio, a tal punto que la propia oposición se esfuerza por acumular a través de una apropiación del discurso de cambio que presentando otro proyecto alternativo al país.

Es evidente que no obstante el crecimiento de la conflictividad, con un carácter radicalmente distinto al registrado en dos décadas de neoliberalismo, el proceso de cambio no ha dejado de avanzar. Las contradicciones dentro del nuevo bloque en el poder y las disputas por la hegemonía en el sujeto histórico –que es plural- han provocado momentos de desaceleración –que no es lo mismo que reversión- y de cierta pérdida de iniciativa política.

Sin embargo, eso no ha implicado, por efecto automático, una recuperación de las fuerzas políticas – partidarias, cívicas y de otra naturaleza- de la derecha, aunque se nota todavía favorable a los sectores conservadores la relación de fuerzas en el campo mediático, que es desde donde la revolución sufre un asedio permanente y sistemático.

Los tres intentos más serios de la derecha por montarse en los conflictos para activar a fondo su estrategia de desgaste prolongado del gobierno y el liderazgo del presidente Evo Morales se dieron con la marcha indígena de 2011, la huelga de los profesionales y trabajadores de la salud y el motín policial de este año, sin haber alcanzado sus objetivos.

Los días del motín policial –montado sobre una legítima demanda de los policías de base y en medio de una crisis institucional de los uniformados alentada desde la embajada estadounidense-, fue construyendo un escenario de golpe de estado y es el único peligro real que fue sorteado con éxito por una táctica gubernamental que combinó la movilización de sus sectores sociales más duros y por no caer en la provocación.

Pero quizá, por razones metodológicas y de espacio, deba dividirse estos dos años y medio de gobierno en dos grandes momentos:

El primer momento, (enero 2010-noviembre 2011) se caracterizó por el retorno de los movimientos sociales, particularmente de los trabajadores urbanos, cooperativistas y el proletariado minero, a sus intereses particulares, lo que ciertamente facilitó la tendencia, ya advertida antes de las elecciones de 2009, hacia un mayor protagonismo estatal.

Esta tensión creativa, como diría el vicepresidente Álvaro García Linera, entre el empuje desordenadamente democratizador de los sectores y movimientos sociales y la tendencia del Estado a concentrar las decisiones, así como el privilegiar las reivindicaciones sectoriales de parte de los primeros, expresó el paso de las relaciones de correspondencia armoniosa entre el Estado y la

sociedad civil organizada que acompañaron al proceso entre enero de 2006 y diciembre de 2009 al establecimiento de relaciones de correspondencia no armoniosa vigentes hasta ahora.

Sin embargo, esta nueva forma de relacionamiento –que no implica ruptura de los movimientos sociales con el gobierno, como erróneamente presenta la oposición partidaria y mediática- no impidió que el proceso de cambio desarrollara con éxito dos nuevas tareas derivadas de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado: las elecciones locales –departamentales y municipales-, con lo que se dio paso a la constitución de gobiernos subnacionales con amplia mayoría del MAS y la selección democrática, mediante sufragio universal, de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional.

Quizá lo más difícil se enfrentó en diciembre de 2010 cuando fracasó un intento de nivelar el precio de los carburantes a estándares internacionales por mecanismos neoliberales, lo cual es una convocatoria a ser más creativos a la hora de querer resolver algunos de los problemas de la macroeconomía.

El segundo momento (diciembre 2011 hasta la fecha) se inaugura con el Primer Encuentro Plurinacional para Profundizar el Cambio, cuyo desarrollo se dio en tres tiempos y que permitió estructurar una agenda con la más amplia participación social. Si bien la COB no asistió, un alto porcentaje de sus sindicatos miembros aceptó la invitación oficial y no menos importante fue la presencia del sector empresarial.

Las condiciones favorables para organizar esta nueva forma de participación social (encuentros y cumbres) empezaron a sentarse, paradójicamente, durante la marcha de un sector de los indígenas de las tierras bajas hacia la ciudad de La Paz, en rechazo a la construcción de una carretera por el TPNIS que, debido a la violenta intervención policial, recibió el apoyo de sectores sociales opositores al gobierno y se desactivó con la promulgación de un decreto supremo que prohibía la obra de vinculación y declaraba la intangibilidad del parque.

Otra marcha, esta vez a favor de la carretera, le dio al gobierno la oportunidad de tomar la iniciativa a través de la convocatoria a una consulta, como mecanismo de materialización de los tratados internacionales y la nueva Constitución Política del Estado, así como de restablecer su relación con los indígenas de las tierras bajas.

A partir de las conclusiones del Primer Encuentro Plurinacional la desaceleración llegó al límite, se retomó paulatinamente el ritmo y se dio paso a una tendencia creciente de disputa por los excedentes. Toma de yacimientos, principalmente mineros, por parte de comunarios, cooperativistas y trabajadores del subsuelo han marcado la tónica, y si bien no dejan de provocar molestia al gobierno –pues lo tienen ocupado en la búsqueda de soluciones-, al mismo tiempo le han permitido continuar, con legitimidad, avanzando en su proyecto de la recuperación estatal de los recursos naturales por la vía de la nacionalización o la reversión. Colquiri y Malku Kota son el ejemplo.

Es decir, lejos estas pugnas por quedarse con la mayor parte de la torta, como diría René Zavaleta, no se dan por falta de recursos sino por su demasía, no interpelan políticamente al gobierno y más bien le son altamente funcionales a su proyecto de construcción hegemónica.

La iniciativa política está de nuevo en el gobierno y los movimientos sociales. El motín policial que quiso ser aprovechado para montar un escenario de golpe de estado ha demostrado que la mayor parte de los sectores sociales lo mismo se disputan entre ellos los excedentes generados por la economía que se unifican para defender su revolución.

Fuente: Hugo Moldiz. Rebelión

CENTROAMÉRICA

DENUNCIAN A TRANSNACIONALES QUE SAQUEAN LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS

En los últimos años las empresas transnacionales de minería e hidroeléctricas se han ubicado en las regiones más ricas en diversidad, la región centroamericana en los últimos tiempos es golpeada por los daños causados por trabajos mineros e hidroeléctricos: (destrucción de los bosques,

contaminación del agua, del aire, enfermedades, criminalización y persecución hacia los pueblos organizados entre otros daños.

En cuanto al El Salvador (5,744,113 habitantes según censo del 2007), la población organizada continúa en resistencia en contra de la empresa minera transnacional Pacific Rim señala Oscar Recinos de la CLOC Vía Campesina del país salvadoreño.

Recinos dijo que dicha transnacional ha causado daños graves en el territorio, señaló que por mucho tiempo estuvo haciendo una campaña de minería verde a esa propuesta las familias resistieron, también indicó que la lucha de la población es para que no se contamine la cuenca del río Lempa que en la actualidad abastece a casi la mitad de la población, Pacific Rim opera con un permiso de exploración, ante la oposición del Estado de no permitir la explotación minera, ésta empresa ha interpuesto una demanda por 120 millones de dólares contra el país ante el Centro de Resolución de Conflictos en Inversión CIADI, argumentando expropiación de ganancias.

Hasta el momento, el proceso sigue abierto, y solo mediante una Ley que prohíba la minería se puede evitar la intervención de empresas mineras, señala la Mesa Nacional Frente a la Minería.

Los trabajos de dicha empresa se intensificaron seis años atrás saqueando el territorio, a raíz de los trabajos de la empresa se han asesinado a comunales por la defensa que han emprendido por el territorio. Entre los dirigentes ambientalistas asesinados, están Dora Alicia Recinos de 32 años, miembro del Comité Ambiental de Cabañas, quien murió embarazada de ocho meses y Juan Francisco Duran Ayala fue el último asesinado el 24 de junio de 2011, refiere la Mesa Nacional Frente a la Minería y organizaciones ambientales de El Salvador.

La lucha sigue afirmó Recinos quien agregó que las comunidades están organizadas y seguirán denunciando a nivel internacional el tipo de saqueo que hacen las transnacionales, además continuarán exigiendo una reforma agraria integral, sus demandas son claras la minería no es factible en el país salvadoreño según el último informe de las Naciones Unidas, (Oficina de las Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres) del 2011 revela que El Salvador está entre los primeros diez países más vulnerables de la tierra. Hay una pérdida del 30% de biodiversidad, es el país más deforestado del Continente después de Haití, también señala que es el que tiene menos acceso al agua en la región centroamericana.

En el caso de Guatemala son varias las empresas transnacionales que con el aval de autoridades de gobierno saquean los bienes naturales y violan los derechos de los pueblos, se mencionan la mina Marlin que tienen la explotación en Sipacapa San Marcos, también la empresa cañera Chabil Utzaj ingenios a nivel nacional que está en la Costa Sur socios como los ingenios Pantaleón, Madre Tierra, La Unión, Santa Ana, Ingenio Concepción, El Pilar, Palo Gordo, señala Rafael González de la CLOC Vía Campesina en Guatemala quien agregó que alrededor de veinte ingenios de la Costa Sur tienen sintonía con la empresa cañera Chabil Utzaj ubicada en el Valle del Polochic (territorio Queqchi donde fueron desalojadas alrededor de 800 familias en marzo del 2011).

Las empresas mineras, hidroeléctricas cañeras destruyen la madre tierra contaminan el ambiente violan los derechos laborales pagando salarios injustos tratos no dignos y saqueo de los bienes de los pueblos, dijo González quien refirió que la palma africana es el producto que ha acaparado grandes extensiones de tierra en la costa sur, norte de Cobán y Petén

El Frente Nacional de Sectores afectados por la producción Piñera -FRENASAPP- señala que Costa Rica es el primer exportador mundial de piña desde el 2007, dicho cultivo se ha extendido durante los últimos años, esto ha provocado el acaparamiento de terrenos bosques y sembradíos de otros cultivos, refieren que los países europeos son el principal mercado de la piña costarricense.

Según datos de Observatorio de las Multinacionales en América Latina señala que los beneficios de la siembra de estos monocultivos queda en manos de pocas empresas transnacionales, refieren que la fuerte expansión del cultivo de la piña no es con las mismas condiciones para los pequeños y medianos productores. En la actualidad los pequeños productores están desprotegidos sin incentivos.

Las leyes laborales son violentadas, no se respetan las jornadas de trabajo las garantías sociales no son reconocidas por la alta rotación de las personas trabajadoras que cambian de puesto antes del

tiempo establecido por ley (tres meses) y la persecución que sufren dirigentes y personas trabajadoras.

Lidieth Hernández de la CLOC Vía Campesina de Costa Rica dijo que las empresas extranjeras han desalojado a miles de pequeños productores para acaparar las tierras y sembrar piña eso ha dado como resultado una gran contaminación de mantos acuíferos y contaminación para quienes trabajan la tierra, porque después de la cosecha los terrenos quedan completamente contaminados, las transnacionales de piña han abarcado gran territorio del país antes se ubicaba en la costa sur ahora ya tiene presencia en el norte donde se le llama el corazón de las grandes extensiones de piña, señaló Hernández.

La lideresa señala que cuando las familias quieren permanecer en sus tierra tienen que hacer un contrato con la transnacional para que está les compre la piña (pero no cualquier piña sino la de calidad buen tamaño y peso) el que firma el contrato debe ver que hace con la piña que no llene las expectativas de la empresa, agregó que entre las empresas que han dañado el país mencionó la Dole y Hortifruti.

Las comunidades organizadas de Panamá luchan en contra de la empresa minera Petaquilla Gold debido a que los trabajos implementados por las mineras han destruido los manglares en el distrito Denoso, muerte de peces, persecución y asesinato a líderes comunitarios, señaló el representante de la CLOC Vía Campesina en Panamá Erick Fernández.

La intimidación y persecución hacia el pueblo organizado que se opone a los trabajos de la minera ha sido constante por parte de autoridades y agentes de seguridad de la minera además el respaldo que las empresas saqueadoras mineras tienen de parte del gobierno de Ricardo Martinelli se ve a todas luces, es de recordar la masacre en contra del pueblo originario Ngöbe-Buglé ocurrido en marzo de 2012.

Asimismo denunció el dirigente que las empresas mineras tienen gente de seguridad para que no se aproximen a las instalaciones dichas personas son conocidas como torturadoras ya que en gobiernos anteriores estuvieron en cargos de inteligencia en gobiernos de dictadura tal es el caso de del mayor Felipe Camargo.

Fernández dijo que en la actualidad según estudios en Panamá se tienen solicitud de concesiones de más del 43% del territorio panameño, agregó que como CLOC Vía Campesina se unificará la lucha para continuar con la defensa de la madre tierra y territorio y de los bienes naturales finalizó con la consigna "Resistimos, Venceremos".

En Honduras Movimientos sociales han denunciado al gobierno por ocultar los graves daños que realizan las empresas mineras, -CAFOD- Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar del reino Unido con sede en Londres a través de expertos británicos realizó una investigación donde se descubrió documentación oficial de la contaminación de aguas causadas por la empresa Entremares ubicada en ese país la cual pertenece a la compañía de explotación minera canadiense Glodcorp.

"Alteraciones en la piel, el cráneo, las vías respiratorias y daños en la matriz en el caso de las mujeres, es el saldo que habría dejado la empresa a las diferentes comunidades de la región". <http://servindi.org/actualidad/54375> Expertos indicaron que la contaminación que existe en la zona durará más de 100 años debido a que en esa región, la minería se practica desde tiempos remotos.

El Tribunal Popular Internacional de Salud que tuvo presencia en Guatemala en el mes de julio, exigió a la minera canadiense Goldcorp que suspenda todas sus operaciones en Centroamérica y garantice la no repetición de sus estragos en Guatemala, México y Honduras.

Los jueces también exigieron a la compañía reparación y compensación por los graves daños ocasionados a las comunidades y el medio ambiente en los tres países. Asimismo condenó las actuaciones de la empresa GoldCorp en sus proyectos ubicados en Honduras, Guatemala y México por ser consideradas altamente dañinas para la salud y la calidad de vida, la calidad ambiental, y el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y campesinas afectadas.

Asimismo condenaron la actitud cómplice e irresponsable de los Estados de los países de donde provienen las denuncias por no asegurar el ejercicio de derechos a las y los afectados por la

empresa denunciada y su condena al Estado canadiense por apoyar y promover en diversas formas las irresponsables inversiones mineras en Mesoamérica.

Fuente: Rocizela Pérez Gómez. CLOC Vía Campesina (Guatemala)

COLOMBIA

ACUERDO GENERAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA:

“Los delegados del Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP):

Como resultado del Encuentro Exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre Febrero 23 de 2012 y (xxx), y que contó con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante:

Con la decisión mutua de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera; atendiendo el clamor de la población por la paz, y reconociendo que:

La construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos, sin distinción; El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse; El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso.

El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país; Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial; Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas de la paz; Con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitación a toda la sociedad colombiana, así como a los organismos de integración regional y a la comunidad internacional, a acompañar este proceso;

Hemos acordado:

I. Iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un Acuerdo Final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera.

II. Establecer una mesa de conversaciones que se instalará públicamente (un mes después del anuncio público) en Oslo, Noruega, y cuya sede principal será La Habana, Cuba. La mesa podrá hacer reuniones en otros países.

III. Garantizar la efectividad del proceso y concluir el trabajo sobre los puntos de la agenda de manera expedita y en el menor tiempo posible, para cumplir con las expectativas de la sociedad sobre pronto acuerdo. En todo caso, la duración estará sujeta a evaluaciones periódicas de los avances.

IV. Desarrollar las conversaciones con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Noruega como garantes y los gobiernos de Venezuela y Chile como acompañantes. De acuerdo con las necesidades del proceso, se podrá de común acuerdo invitar a otros.

La siguiente agenda:

1. Política de desarrollo agrario integral- El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país.

- Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.

- Programas de desarrollo con enfoque territorial.

- Infraestructura y adecuación de tierras.

- Desarrollo social: salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza.
- Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo.
- Formalización laboral. Sistema de seguridad alimentaria.

2. Participación política-

-Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

-Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

-Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

3. Fin del conflicto

Proceso integral y simultáneo que implica:

- Cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivas.
- Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo a sus intereses.
- El Gobierno Nacional, coordinará la revisión de la situación de las personas privadas, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP.
- En forma paralela el gobierno nacional intensificará el combate para acabar la organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos.
- El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
- Garantías de seguridad.
- En el marco de lo establecido en el Punto 5 (Víctimas) de este acuerdo se esclarecerá, entre otros, el fenómeno del paramilitarismo.
- La firma del Acuerdo Final inicia este proceso, el cual debe desarrollarse en un tiempo prudencial acordado por las partes.

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

- Programas de sustitución de cultivos ilícitos. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por los cultivos ilícitos.
- Programas de prevención del consumo y salud pública.
- Solución del fenómeno de producción del consumo y la salud pública.

5. Víctimas

- Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional – FARC-EP. En ese sentido se tratarán:
- Derechos humanos de las víctimas.
- Verdad.

6. Implementación, verificación y refrendación

La firma del Acuerdo Final da inicio a la implementación de todos los puntos acordados.

- Mecanismos de implementación y verificación:

a. Sistema de implementación, dándole especial importancia a las regiones.

b. Comisiones de seguimiento y verificación.

c. Mecanismos de resolución de diferencias.

Estos mecanismos tendrán capacidad y poder de ejecución y estarán confirmadas por representante de las partes y de la sociedad según el caso.

-Acompañamiento internacional.

-Cronograma.

-Presupuesto.

-Herramienta de difusión y comunicación.

-Mecanismo de refrendación de los acuerdos.

Las siguientes reglas de funcionamiento:

1. En las sesiones de la Mesa participarán hasta 10 personas por delegación, de los cuales hasta 5 serán plenipotenciarios quienes llevarán la vocería respectiva. Cada delegación estará compuesta hasta por 30 representantes.

2. Con el fin de contribuir al desarrollo del proceso se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la Agenda, una vez surtido el trámite correspondiente.

3. Para garantizar la transparencia del proceso, la Mesa elaborará informes periódicos.

4. Se establecerá un mecanismo para dar a conocer conjuntamente los avances de la Mesa. Las discusiones de la Mesa no se harán públicas.

5. Se implementará una estrategia de difusión eficaz.

6. Para garantizar la más amplia participación posible, se establecerá un mecanismo de recepción de propuestas sobre los puntos de la agenda de ciudadanos y organizaciones, por medios físicos o electrónicos. De común acuerdo y en un tiempo determinado, la Mesa podrá hacer consultas directas y recibir propuestas sobre dichos puntos, o delegar en un tercero la organización de espacios de participación.

7. El Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Mesa, que serán administrados de manera eficaz y transparente.

8. La Mesa contará con la tecnología necesaria para adelantar el proceso.

9. Las conversaciones iniciarán con el punto Política de desarrollo agrario integral y se seguirá con el orden que la Mesa acuerde.

10. Las conversaciones se darán bajo el principio que nada está acordado hasta que todo esté acordado.

Escrito por Arco Iris

26 AÑOS DE CONDENA AL GENERAL (R) RITO ALEJO DEL RÍO

El juzgado octavo penal del circuito especializado de Bogotá condenó a 312 meses de prisión e interdicción de derechos y funciones públicas por el termino de 10 años al a General 9 (R) Rito Alejo del Río Rojas por el asesinato del que fue víctima al afrodescendiente Marino López Mena en el marco de la Operación Génesis adelantada en el Cacarica y Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997.

El juez declaró “penalmente responsable del delito de homicidio agravado en calidad de autor mediato por dominio de una estructura organizada de poder”. Resolvió, además, “no otorgar al sentenciado ningún mecanismo sustitutivo de la pena de prisión”. En el fallo se sostiene que la operación “Génesis” y las actuaciones paramilitares fueron una única unidad de propósitos entre la brigada 17 y los paramilitares de las AUC y que formaba parte de una estrategia de de consolidación paramilitar, toma de territorios y sometimiento de un enemigo común.

Concluyó la decisión que la muerte macabra de Marino López no es aislada sino un medio para provocar terror “y se realiza en un contexto preterdeterminado y con un objetivo específico , vale decir, causar TERROR para lograr el desalojo de una población civil no combatiente”.

Este proceso se inició con vinculación de Rito Alejo del Río de 2008, luego de enfrentarse diversos mecanismos de impunidad.

En la etapa de juicio de este proceso, el abogado de la defensa del condenado ex general, que ordenó la operación 004 a la brigada 17 afirmó que en el desarrollo de toda la operación Génesis, tuvo comunicación permanente con el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Igualmente en su defensa se sostuvo que la operación tuvo conocimiento del presidente de ese momento Ernesto Samper Pizano y que se realizó por el tipo de bombas y objetivos con el consentimiento del Estado Mayor Conjunto.

El pretexto de un ataque contra guerrilleros del frente 57 de las FARC en la cuenca del río Salaquí para lograr la liberación de unos infantes de Marina en poder de ese movimiento armado, esa fue la excusa para la operación de efectivos de la brigada 17 y sus aliados paramilitares.

El desarrollo de la estrategia paramilitar en el bajo Atrato en Cacarica y Salaquí fue anunciada por los paramilitares desde mayo de 1996. En las etapas de este proceso, el ex mando paramilitar Jhon Fredy Rendón Herrera, conocido como “El Alemán” extrajudicialmente envió una carta al general ® Rito Alejo del Río Rojas para que dijeran toda la verdad. El general guardó silencio y en todo el proceso indicó que no tenía vínculos con paramilitares.

En octubre de 2008, Noticias Uno divulgó un video en que Rito Alejo del Río, privado de la libertad por este proceso, conversó con el ex ministro Fernando Londoño urdiendo un plan de desprestigio con los llamados “negritos” y de montajes judiciales contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz. Esta campaña se mantiene hasta hoy sin investigación alguna del fraude procesal.

La decisión judicial puede ser apelada por la defensa del general ex militar. La decisión conocida hoy es un pequeño soplo de justicia que descorre la niebla de la impunidad y la criminalidad en que está inmerso amplios sectores del Estado en la región del bajo Atrato y el Urabá antioqueño. Por la exigencia de justicia, las comunidades negras de Cacarica, asociadas en Comunidades de Autodeterminación, Vida y Dignidad, CAVIDA, y un grupo de mujeres que habitan aún desplazadas en Turbo han sido blanco de persecución judicial, amenazas, hostigamientos desde 1997 hasta hoy, exilios, y tres desplazamientos forzados.

En 2003 luego de permanentes e insistentes exigencias de justicia en respuesta con el concurso del general Jorge Enrique Mora Rangel y personas cercanas a empresas como Pizano S.A., y Maderas del Darién se realizó un montaje judicial contra las víctimas de este proceso.

Se acusó con falsos testigos a los miembros de las Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad del Cacarica -Cavida- de los consejos comunitarios como desplazadores, torturadores, auxiliares y o guerrilleros, traficantes de armas y de drogas.

La empresa maderera luego de la terminación de la operación “Génesis” inició operaciones de extracción maderera en el sitio conocido como La Balsa, en Cacarica, justo en el mismo lugar donde los paramilitares se instalaron cuando ingresaron con la opeación “Génesis”.

Posteriormente, los paramilitares montaron en el mismo lugar una empresa C.I Multifruits Ltda. exportadora de banano, con proyecciones de palma y de coca, como los anunciaron los paramilitares. Para el primer producto firmaron un acuerdo con la empresa Del Monte en el que participo un familiar del “Alemán” llamado Germán Monsalve y un dirigente del partido conservador Juan Manuel Campo Eljach. Monsalve se encuentra detenido en los Estados Unidos.

Las operaciones ilegales del DAS también se realizaron contra esta comunidad y sus acompañantes, pretendiendo alimentar el montaje judicial, el desprestigio de estas comunidades. Esta actuación se realizó con operaciones en el exterior.

En esta comunidad más de 85 personas han sido asesinados o desaparecidos desde 1996. Los crímenes permanecen en la impunidad.

Rito Alejo del Río fue precluido de su responsabilidad en el asesinato de Marino López, la operación "Génesis" y más de 300 crímenes asesinados, desaparecidos en la comunidad de Cacarica, Dabeiba, San José de Apartadó, Jiguamiandó y Curvaradó.

Si bien esta es una decisión importante, caben los recursos de ley por parte de la Defensa de Del Río. De confirmarse la decisión es un avance en el derecho a la justicia. Sin embargo, aparecen ocultos otros planificadores, determinadores de la operación militar, vinculados a sectores importantes de poder empresarial, que siguen disfrutando de la impunidad. Esta decisión confirma la verdad real desoída a las víctimas de Cacarica por sectores de diversos gobiernos desde Samper, Pastrana, Uribe y Santos.

Apartes del prontuario de uno de los victimarios del bajo Atrato Rito Alejo del Río Rojas

Entre 1982 - 1983 se encontraron en Israel con Carlos Castaño y aprovechó para conseguir arsenales de armas para los paramilitares.

Entre 1985 - 1986 el paramilitar Alfonso de Jesús Vaquero, alias "Negro Vladimir" confesó en su indagatoria, que se reunió con el coronel Del Río para coordinar las actividades paramilitares en la región, mientras era comandante del Batallón Reyes de Cimitarra Santander.

Entre 1986 - 1987 mientras era comandante del Batallón Girardot de Medellín ordenó asesinar a una familia de Santa Rosa de Osos, Antioquia, a la que consideraba guerrilleros. Un cabo decidió desobedecer las órdenes y fue sancionado por el militar.

Entre 1996 recién llegado a la comandancia de la brigada 17 de Carepa Antioquia se dio la desaparición, en la sede de esa unidad militar a Alcides Torres Arias y Angel David Quintero. El Coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, Segundo Comandante de esa misma brigada 17 y Jefe de su Estado Mayor, denunció que Del Río había dejado de actuar contra los paramilitares, sus hombres los dejaban circular con libertad y había información de la brigada de la que era condecorador Carlos Castaño.

En febrero de 1997 Del Río desde la comandancia de la brigada 17 ordenó la operación "Génesis" en la que militares y paramilitares asesinaron al afrodescendiente del Cacarica, Marino López, a quien cortaron la cabeza y la patearon en repetidas ocasiones como jugando fútbol. Por las operaciones militares y paramilitares la población fue desplazada forzada.

En abril de 1997, mientras seguía siendo comandante de la brigada 17, la alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, denunció que paramilitares ingresaban y salían sin problemas de la brigada 17, la unidad de acción entre las dos estructuras y la ausencia de persecución a la misma.

Entre 1996 - 1997 ante la Procuraduría, el ex soldado profesional Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes que perteneció a la Brigada 17 atestiguó que fue obligado a trabajar en apoyo y en unidad de acción con las estructuras paramilitares que operaban en Urabá por este mando militar. El testigo da fe de las reuniones del Río en la Brigada 17 con paramilitares.

Entre 1996 - 1998 el Capitán, hoy retirado, de la Policía Nacional, Gilberto Cárdenas González, quien fue Jefe de la SIJIN de Urabá sorprendió en el Totumo, Necoclí, al general Del Río en reunión con 11 jefes paramilitares y 3 jefes de las convivir de la zona.

En 1998 en un documento secreto y posteriormente desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos se le: "REF: A) BOGOTA 292141Z MAY 98 B) BOGOTA 071647Z APR 98 INVESTIGACIÓN DEL GENERAL RITO ALEJO DEL RIO, COMANDANTE DE LA BRIGADA 13 (BOGOTA) ESTA TAMBIÉN EN CAMINO. SEGÚN LA PRENSA, LOS SUPUESTOS VINCULOS DEL GENERAL CON LOS ACCU PARAMILITARES DE LA REGION DEL URABA, MIENTRAS QUE ESTUVO AL MANDO DE LA BRIGADA 17 DESDE DICIEMBRE DE 1995 A DICIEMBRE 1997, SON OBJETO DE LA INVESTIGACION".

En 1998 Del Río fue comandante de la Brigada 13 en Bogotá. En ese año sucedió el secuestro y posterior asesinato del empresario israelí Benjamín Khoudari y de otras personas en 1998, los instructores del expediente 35.487 sobre el caso, al realizar una inspección en la empresa MELTEC, S. A., de telefonía celular, comprobaron que tres números involucrados en llamadas relacionadas con esos secuestros correspondían a celulares asignados a Rito Alejo del Río, representante legal de la brigada 13.

En Mayo de 1998 el comandante de la brigada 13 realizó un allanamiento arbitrario la sede de la Comisión de Justicia y Paz, pretendiendo ingresar, según fuentes de alta credibilidad , armas y material de propaando de los grupos guerrilleros> En 2008,Luis García y Rubén Salazar consiguieron, por petición del Río a un falso testigo para que declarara que algunos defensores de derechos humanos y sindicalistas le habían pagado para que declararan en contra del general. El falso testigo, declaró luego que el General lo había recibido en las instalaciones de la brigada 13 luego de su "declaración"; cómo lo había abrazado y agradecido, brindándole un almuerzo en la Brigada y enviando a su chofer para que lo llevara a tomar un bus de regreso a su casa.

En octubre de 1998 se conoció una comunicación del general, ya siendo procesado por el asesinato de Marino López, con el ex Ministro Fernando Londoño Hoyos, donde el ex militar planteó desarrollar una estrategia de desprestigio y de montaje judicial contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.

En septiembre de 2000, ya desvinculado del Ejército el General del Río se reunió con Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y otros paramilitares en la finca La Veinticuatro de Necoclí. Luego, un grupo de 60 paramilitares salieron de esa finca a cometer una masacre en Tierra Alta Córdoba. Entre 2007 - 2009 el paramilitar del bloque bananero Ever Veloza confesó haberse reunido con el G. Rito Alejo en la Brigada 17, haber sacado vivos de la brigada en vehículo del ejército a dos personas que luego desapareció y de haber tenido plena colaboración del general.

En mayo de 2007, Salvatore Mancuso declaró ante la Fiscalía, que el general Del Río y dos generales más, trabajaron con él para lograr los objetivos de la "pacificación" de Urabá. Aseguró que el general les indicaba a los escuadrones paramilitares qué terrenos podían tomar y cuáles zonas estaban libres de peligro para concentrar a los hombres reclutados.

En noviembre de 2007 se conoció el testimonio del ex Sargento Edwin Guzmán quien se vinculó a los paramilitares que operaban en Urabá a mediados de los años 90 y que le reveló a dicho medio: "A mi general Rito Alejo Del Río lo llaman 'el papá de las autodefensas' porque fue quien empezó a uniformarlas y a darles el manejo militar que se necesitaba. En esa época los paracos llegaban hasta la brigada uniformados y con armamento. Llegué a ver incluso a dos contraiguerrillas de las autodefensas embarcándose en un helicóptero MI del Ejército, en el helipuerto de la Brigada".

Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, reconoció que hombres bajo su mando ejecutaron entre febrero y abril de 1997, la Operación Génesis con efectivos de la Brigada 17, al mando del general (r) Rito Alejo del Río.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

EL SALVADOR

BAIN CAPITAL Y LOS ESCUADRONES DE LA MUERTE SALVADOREÑOS - EL DINERO SANGRIENTO DE ROMNEY

Revelaciones recientes sobre la altamente lucrativa compañía Bain Capital de Mitt Romney ayudan a conectar los puntos entre paraísos fiscales offshore, inversionistas sospechosos y el papel que los beneficios mal habidos juegan en el casino del actual capital financiero.

Los Angeles Times y *Huffington Post* publicaron el mes pasado investigaciones que muestran que más de un tercio de los 37 millones de dólares reunidos por Romney para lanzar Bain Capital a mediados de los años ochenta provino de ricos latinoamericanos, en su mayoría de familias salvadoreñas vinculadas a los escuadrones de la muerte.

Un paraíso fiscal en Panamá aseguró a Bain el secreto necesario para atraer los aproximadamente 6,5 millones de dólares de familias salvadoreñas de lo que muchos expertos en derechos humanos calificarían de “dinero sangriento”.

Mientras vivía en El Salvador en 1989, mi familia fue víctima del terror derechista, por lo tanto la noticia fue como un golpe en la cara. Pero como profesora, sé que la generación de estadounidenses nacidos a partir de 1980 tiene poca idea de la inquietante historia de ayuda de EE.UU. al militarismo centroamericano. Tal vez sea el motivo por el cual no se ha informado más sobre esta historia. Quisiera explicar por qué utilizo una expresión tan brutal como dinero sangriento.

Las revelaciones me hicieron volver a noviembre de 1989 cuando trabajé como corresponsal a tiempo parcial para el *New York Times* y otros periódicos estadounidenses en San Salvador. Era por la noche. Estaba sentada en el piso de mi dormitorio con un laptop terminando un artículo sobre las recientes incursiones de la fuerza aérea en vecindarios urbanos en la capital. Momentos después de enviar el archivo sonó el teléfono. “Tiene 24 horas para abandonar el país o se puede despedir de su familia”, dijo un hombre en inglés con acento.

Los tenebrosos escuadrones de la muerte de mis artículos se materializaron repentinamente en una amenaza personal, alguien con un fusil nos tenía a mi hijo pequeño y a mi en su punto de mira. Era imposible partir porque el aeropuerto y las compañías de autobuses estaban cerrados por los combates, por lo tanto estuve oculta una semana de pesadilla con mi hijo mientras pasaba largas horas corriendo entre él y mi oficina del cuerpo de prensa extranjera constantemente en alerta mirando por el retrovisor de mi jeep.

Durante ese año habíamos perdido a la tía de mi hijo debido al terror. Marta Lidia “Tita” Guzmán, activista de UNADES, un grupo que defendía a las víctimas del terremoto de 1986, desapareció pocas horas después de que la Policía Nacional allanara su oficina en junio de 1989. Nunca hallamos su cuerpo. Decenas de miles de personas murieron de la misma manera, asesinados por lo que el politólogo William Stanley llamó un “Estado de extorsión a cambio de protección”.

Para mí es grotesco imaginar que familias profundamente enredadas en las operaciones de “la extorsión a cambio de protección” tras el asesinato de Tita hayan ayudado a financiar el ascenso al poder de un candidato a la presidencia de EE.UU. Lejos de desmentir las afirmaciones, Romney nombró y agradeció públicamente a varios inversionistas salvadoreños en un discurso de 2007 en Miami. Funcionarios estadounidenses e investigadores de derechos humanos habían relacionado a parientes cercanos de los inversionistas, pertenecientes a las familias Poma, Dueñas, de Sola y Salaverria, con la violencia paramilitar de 1984 cuando se reunieron con Romney. Algunos de sus parientes fueron acusados de haber dirigido personalmente la violencia, otros de haberla apoyado entre bastidores bajo cobertura del partido de extrema derecha ARENA que orquestó los escuadrones de la muerte en esos años.

El un artículo del *Times* del 19 de julio cita las solicitudes corporativas de Bain en Massachusetts, así como una revelación de 1994 del *Boston Globe* que calculó la inversión de los salvadoreños en Bain en 6,5 millones de dólares, sobre la base de escritos del ejecutivo de Bain, Harry Strachan, quien presentó a Romney a los inversionistas. El *Globe* citó dichos escritos de Romney en los que afirmaba que Bain había revisado los antecedentes de los inversionistas individuales (ninguno de los cuales está acusado de crímenes contra los derechos humanos) pero no había investigado a sus

familias. El blog *Salon* también informó del reclutamiento por parte de Romney de los inversionistas salvadoreños en enero.

Aproximadamente 35.000 salvadoreños fueron asesinados, la mayoría por motivos políticos, entre 1979 y 1984 cuando la violencia llegó a niveles genocidas, cuando habitualmente se encontraban cadáveres mutilados en vertederos o arrojados al borde de las rutas. En su libro de 1992 *How Holocausts Happen* el sociólogo Douglas Porpora argumentó que, considerando la proporción de salvadoreños afectados y la naturaleza sistemática de la violencia a principios de los años ochenta, se justificaba considerar este período como un acontecimiento parecido al Holocausto.

La generosa ayuda exterior del gobierno de Reagan al régimen militar protegió a una pequeña oligarquía de familias cuya riqueza provenía de plantaciones dependientes de mano de obra barata y de un campesinado despojado de sus tierras por la fuerza. Después de un alto el fuego de 1992 un estudio de las Naciones Unidas culpó a los militares del gobierno y a los escuadrones de la muerte aliados de un 85% de las muertes de civiles. Documenté la cantidad de víctimas de los despojos de tierras y del militarismo salvadoreño en mi libro de 2010 *Healing the Body Politic* (Rutgers University Press), que rastreó 25 años de resistencia al régimen por parte de los organizadores de la salud comunitaria rural durante los 12 años de guerra y después.

El partido ARENA se transformó posteriormente de una fachada de los escuadrones de la muerte a un partido del gran dinero en 1989 cuando conquistó la presidencia, gobernando el país y gozando de una estrecha alianza con los gobiernos de EE.UU. hasta su derrota electoral en 2009. El respaldo a los militares salvadoreños de la era de Reagan es visto ahora por los historiadores como negativo para la credibilidad de EE.UU. respecto a los derechos humanos. Es una señal de cambio que durante la visita del presidente Obama en 2011 al país haya honrado la tumba del arzobispo Óscar Romero, un amado sacerdote que se pronunció contra los asesinatos y fue asesinado él mismo por un escuadrón de la muerte. ¡Qué revés sería que una victoria de Romney en noviembre volviera a colocar a EE.UU. al servicio de actuales y antiguos oligarcas latinoamericanos con las manos manchadas de sangre!

Aunque es difícil desenterrar rastros escritos de los bancos de inversiones, los expertos comprenden cada vez mejor que los regímenes genocidas no dependen solo del apoyo militar, sino también de financistas inescrupulosos. A fines de los años noventa el público se sorprendió ante la evidencia de que los nazis alemanes también dependían de financistas vestidos con trajes de negocios. Las audiencias del Comité Bancario del Senado de EE.UU. realizadas durante el gobierno de Clinton evidenciaron que los bancos suizos habían lavado oro nazi robado a las víctimas del Holocausto. Los resultados ayudaron a conducir a un acuerdo en un juicio por 1.250 millones de dólares del Congreso Judío Mundial en el año 2000 que benefició a los sobrevivientes, los cuales habían intentado durante mucho tiempo conseguir acceso a los bienes de sus familias en los bancos.

En 2002 víctimas de la tortura nacidas en El Salvador demandaron con éxito a dos generales salvadoreños retirados (ahora residentes en Florida) ante un tribunal federal de EE.UU. ¡Qué cambio sería si familias de otros salvadoreños asesinados por los escuadrones de la muerte utilizaran esos precedentes para recuperar los bienes de la antigua oligarquía invertidos en cuentas como las de Bain Capital! ¡Pero no solo los salvadoreños deberían preocuparse de las finanzas de casino al estilo de Bain Capital!

¡Qué irónico que mientras la clase media estadounidense perdía terreno en salarios y seguridad laboral en los últimos años, el capitalismo buitre de Bain Capital, que desmanteló compañías y deslocalizó puestos de trabajo estadounidenses haya prosperado, generando beneficios de más de un 50% anual a principios de los años noventa para Romney y sus socios salvadoreños!

Las finanzas tipo casino han gozado desde hace tiempo del proteccionismo republicano. Pero cuando el candidato a presidente del partido obtiene su riqueza asociándose a familias de oligarcas que roban a pobres agricultores y financian asesinatos políticos, las afirmaciones de responsabilidad fiscal y valores de familia comienzan a parecer bastante faltas de contenido.

Mártires como Tita, el arzobispo Romero y miles de asesinados mas merecen algo mejor, y también lo merecen los electores estadounidenses.

Fuente: Sandy Smith-Nonini. CounterPunch

(La doctora Sandy Smith-Nonini es profesora auxiliar adjunta en los Departamentos de Antropología y de Currículum de Estudios Globales en la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill.)

GUATEMALA

UN TRIBUNAL LO CONDENÓ POR LA DESAPARICIÓN DE EDGAR SÁENZ CALITO EN GUATEMALA - GARCÍA ARREDONDO, 70 AÑOS DE CÁRCEL

Sentado, con la vista hacia el piso, pero atento. Así fue como Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional (PN), escuchó la sentencia de 70 años de prisión que en su contra impuso el Tribunal Primero A de Alto Impacto. Familiares del condenado y activistas de organizaciones de derechos humanos asistieron a la última audiencia.

García Arredondo es el responsable de la desaparición forzada de Edgar Sáenz Calito, un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos.

El ente investigador logró comprobar que el exjefe policial ordenó a sus subalternos la detención del universitario el 6 de octubre de 1981. Los hechos ilícitos por los cuales tendrá que cumplir la condena son desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad.

Pablo Xitumul de Paz, juez vocal, leyó el fallo y dijo que el “Tribunal dio valor a todas las pruebas que el MP presentó, entre las que se encuentran declaraciones de testigos y peritos y documentos del mando policial de aquella época. Se constató que el procesado tenía plena autoridad y, como consecuencia conocimiento de lo que ocurrió con la persona desaparecida”, explicó.

Entre los testimonios se encuentra el de Álvaro Ventura, exagente del Comando 6, quien confirmó que Sáenz Calito fue capturado el 4 de marzo de 1981 y enviado a “El cuartito”, un lugar en el que “se investigaba a personas vinculadas con la guerrilla” y donde se hacían interrogatorios “especializados”.

Violeta Ramírez, esposa del estudiante detalló que él estuvo detenido hasta el 9 de junio de 1981 y que minutos después de ser liberado por falta de pruebas, fue secuestrado por 4 hombres armados en las cercanías del Comando 6.

Ligia Estrada declaró que visitó a Sáenz Calito en el Segundo Cuerpo de la PN y estaba golpeado, sufrió toques eléctricos en los genitales, le sumergieron la cabeza en un tonel de agua y le colocaron una capucha con gamezán. Además vio que tenía quemaduras de cigarrillo en el rostro.

Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), calificó como positivo el fallo. “Esperamos por 15 años para ver justicia en este caso. Hoy llegamos a una etapa en la historia del país en que podemos decir que se actúa con apego a la ley”, aseguró.

García Arredondo no quiso emitir ningún comentario. “Estoy cansado, ahora no”, dijo. El exfuncionario fue capturado el 24 de julio de 2011, en su vivienda en la aldea La Pita, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa.

El exfuncionario de la administración de Lucas García afronta otro proceso. Se le vincula a la quema de la embajada de España, hecho que ocurrió el 31 de enero de 1981. En ese lugar murieron 39 personas.

Fuente: Jerson Ramos. El Periódico

HAITÍ

UN LIBRO EXPONE EL PROYECTO VIOLENTO DE LOS PARAMILITARES EN HAITÍ

El ejército brutal de Haití fue disuelto en 1995, sin embargo, los paramilitares armados y uniformados, sin afiliación gubernamental, ahora ocupan antiguas bases del ejército.

El presidente Michel Martelly, quien ha prometido restablecer el ejército, no ha pedido a la policía o a las tropas de la ONU que saquen a estos paramilitares de las bases.

Dada que ejército históricamente se ha opuesto violentamente a la democracia, el plan de Martelly para restablecerlo "sólo puede llevar a más sufrimiento", dice Jeb Sprague en su próximo libro "El Paramilitarismo y el Asalto a la Democracia en Haití" ([Paramilitarism and the Assault on Democracy in Haiti](#)), que se publicará a mediados de agosto por Monthly Review Press.

El papel de las fuerzas militares y paramilitares de Haití ha recibido muy poca atención de universitarios y los medios de comunicación, dice Sprague, un candidato al doctorado en sociología de la Universidad de California en Santa Bárbara. Él espera que su libro contribuya a llenar ese vacío.

Sprague hizo investigaciones durante más de seis años, viajando varias veces a Haití, adquiriendo unos 11.000 documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información, entrevistando a más de 50 personas, leyendo los documentos filtrados por Wikileaks sobre Haití, y estudiando fuentes secundarias.

El autor es un académico, pero no pretende ser neutral. Él cree, sin disculparse, en el derecho de las masas haitianas de elegir su destino.

Para apoyar su argumento, Sprague incluye 100 páginas de notas en el libro.

"Sé que habrá críticos del libro", dijo a IPS: "Yo quería tener una gran cantidad de información que para respaldar lo que estoy diciendo, para que no sea visto como conjetura o rumores."

En su análisis histórico, Sprague transporta al lector al "regalo venenoso" que los EE.UU. dio a Haití después de ocupación de 1915-1934: un ejército "que continuaría la ocupación de EE.UU. "Poco después de las tropas estadounidenses se habían ido, escribe Sprague, EE.UU. creó un ejército "subordinado a los intereses de los EE.UU., la burguesía y los terratenientes".

Sprague escribe sobre el período de las dictaduras de Duvalier padre e hijo, 1957-1986, cuando los EE.UU. considera el ejército haitiano un "baluarte" contra la propagación del comunismo. Él explora la relación "incestuosa" entre los militares y los infames Tonton Macoute de Duvalier, cuyo propósito, dice, era "extorsionar y atacar a los críticos del gobierno, fungiendo como una policía secreta".

Después de la época de los Duvalier, las fuerzas paramilitares continuaron su violencia. En 1988, hombres armados intentaron asesinar al sacerdote, teólogo de la liberación, Jean-Bertrand Aristide, cuya popularidad iba en aumento. Trece personas murieron y 80 resultaron heridas en un atentado.

Pero los pistoleros no actúan solos. Sprague vincula a estos paramilitares con la Escuela de las Américas, el alcalde de Port-au-Prince y empresarios ricos en Haití.

A lo largo del libro, Sprague subraya los vínculos entre las fuerzas paramilitares, que cometen actos de violencia evidentes, y las fuerzas a menudo ocultas de los ricos y el poder nacional e internacional que apoyan a los paramilitares.

En 1991, Aristide se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Haití, pero el ejército lo derrocó del cargo en menos de ocho meses. El ejército no actuó solo. Sprague escribe que para realizar el golpe de estado se requirió la participación de las élites haitianas, funcionarios en Santo Domingo, Washington y París, y "hasta el Vaticano".

En 1994, el presidente Bill Clinton mandó a 20.000 efectivos de la infantería de la marina para restituir a Aristide a su cargo. Pero Aristide presidía un gobierno debilitado por las condiciones impuestas por Washington, en particular un acuerdo para reducir sensiblemente los aranceles sobre el arroz, lo que asestó un duro golpe a la agricultura de Haití.

Aristide disolvió al ejército en 1995, un acto celebrado por las masas, pero odiado por los militares y sus patrocinadores ricos.

Pero la disolución del ejército no libró al país del militarismo. Pocos soldados entregaron sus armas, y muchos huyeron a la República Dominicana.

Otros soldados se integraron a la policía. Aprovechando la situación, el gobierno estadounidense llevó a los reclutas al estado de Missouri para ser entrenados en una base militar. El abogado de Aristide, Ira Kurzban, visitó a la base e informó:

"Cuando entramos... lo primero que vimos fue una unidad de inteligencia del ejército. Más tarde supimos que el proceso de infiltración se inició en la base Leonard Wood y el plan de la inteligencia de EE.UU. era escoger a las personas (o empujar a las personas) que creían que podrían ser los líderes de la policía, corromperlos, y tenerlos a disposición del gobierno de EE.UU."

Una contribución singular del libro es un análisis detallado de Sprague del papel de la vecina República Dominicana (R.D.) en apoyo a los paramilitares haitianos.

En 2000, justo antes de que Aristide comenzara su segundo mandato, los paramilitares intentaron un segundo golpe de estado, que fracasó. Los responsables huyeron a la R.D. Haití pidió su extradición, pero el gobierno dominicano se la negó.

En los próximos años, la República Dominicana sería un refugio para las fuerzas paramilitares, que hacían incursiones asesinas en Haití y regresaban al amparo del país vecino.

Ni los EE.UU. ni la OEA "ejerció presión sobre el gobierno dominicano para detener ... las juergas de asesinatos transfronterizos", dijo Sprague a IPS.

Durante este período, los EE.UU. financiaba partidos de oposición que se reunían con los paramilitares en la República Dominicana, dice Sprague.

Los informes tendenciosos de los medios de comunicación también apoyaban a los paramilitares y sus aliados. Durante y después del golpe de estado de 2004, las protestas de la oposición de unos cientos de personas siempre contaban con la cobertura de los medios mientras las multitudinarias marchas de Lavalas en apoyo a Aristide sólo "contaban con la cobertura de unos pocos medios pequeños, algunos patrocinados por el gobierno".

Aunque los paramilitares destruyeron las comisarías de policía para tomar algunas ciudades y pueblos, fueron los funcionarios de Estados Unidos que físicamente secuestraron y exiliaron a Aristide en la media noche.

Con Aristide afuera, los paramilitares han asumido nuevas funciones. "En marzo de 2004," Sprague, escribe, "una intensa campaña paramilitar fue lanzado frente a una reacción de los pobres de Haití en contra del golpe, que organizaron grandes manifestaciones y mítines".

En el ámbito político, los EE.UU., Francia y Canadá establecieron un gobierno provisional encabezado por un residente de Florida de origen haitiano. Sprague escribe: "Una de sus primeras tareas restablecer el orden y que el país fuera una plataforma para el flujo libre de capitales internacionales".

La actitud de EE.UU. hacia los paramilitares era contradictoria. Poco después del golpe, el embajador de EE.UU. los elogió en la radio haitiana, pero más tarde reconoció que los ex militares podrían debilitar al gobierno más adelante.

Unos 400 paramilitares se han integrado a la policía tras el golpe de estado de 2004. El pequeño cuerpo policial de Haití trabaja, a veces con inquietud, con las 10.000 tropas de la ONU desplegadas en Haití desde el golpe.

Hoy en día, Sprague, escribe, "con la gran presencia de las Naciones Unidas, fue impuesto un nuevo tipo de 'normalidad' en el país. Tras el terrible terremoto de enero de 2010, y con el regreso de Jean-Claude Duvalier y la controvertida elección de Michel Martelly ... ya tienen más libertad los ex-soldados que integran los grupos paramilitares. Martelly ha nombrado a muchos neo-duvalieristas y ex-oficiales derechistas a puestos de seguridad clave de su gobierno".

"Y Martelly está tratando de restablecer el ejército, pero dice que no sería un ejército porque le han dado un nombre diferente: la 'Fuerza de Seguridad Pública'", dijo Sprague al IPS, agregando que hoy en día, como en el pasado, "las élites están tratando de encontrar la fórmula idónea para mantener su control."

Fuente: Judith Scherr. IPS

HONDURAS

LA PESADILLA DE LAS “CIUDADES MODELO”

Durante el primer semestre de 2011, el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (charter cities).

Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio nacional con altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital transnacional para generar empleo. Para muchos, este sueño ya se ha convertido en una pesadilla.

Según su Estatuto constitucional, las RED gozarán de un régimen territorial especial, teniendo su personalidad jurídica, su propio fuero jurisdiccional, su propio sistema de administración, sistema migratorio y su normativa legal.

Además, tendrán su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de contratos y contratar sus deudas internas o externas.

Ante una decisión que aparenta ser un intento burdo para paliar la grave crisis política, económica y social originada a raíz del golpe de Estado de 2009, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que creó las RED.

Para los juristas, el decreto atentaría contra preceptos pétreos establecidos en la Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.

“En las RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual es totalmente inconstitucional. Además, entregando parte del territorio nacional de forma indefinida a extranjeros, se está violentando la soberanía del país”, expresó a Sirel, Jari Dixon, ex fiscal y miembro de la asociación que promovió el recurso.

Después de casi un año de su presentación, la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido una resolución.

“Ya existe un dictamen del Ministerio Público que resuelve que el decreto es inconstitucional, sin embargo la Corte se encuentra bajo una fuerte presión por parte del Congreso Nacional y el poder ejecutivo, para que declare sin lugar el recurso”, dijo Dixon.

“Con este decreto no sólo se está atentando contra la soberanía nacional, sino que se está creando un Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las poblaciones que vivimos en las zonas y que vamos a ser afectadas por el proyecto”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Según la dirigente garífuna, ya existirían planes para instalar las RED en la costa del Atlántico hondureño, afectando gravemente a más de 24 comunidades garífunas, al pueblo miskito y a las familias campesinas.

Ya hemos visto como en el pasado han entregado el territorio para la explotación minera, los megaproyectos hidroeléctricos y turísticos, la expansión de los monocultivos, la maquila. Una vez más se está privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del pueblo”, manifestó Miranda.

“En nombre del desarrollo, Honduras está a la venta, y esto no es más que el reflejo de un Estado fallido, que aún no recupera su institucionalidad después del golpe de Estado”, concluyó la dirigente garífuna.

Artículo completo en: <http://alainet.org/active/57561&lang=es>

MÉXICO

COMER O NO COMER: ¿QUIÉN DECIDE?

Como serpiente que se muerde la cola, el sistema alimentario industrial – que es el principal causante del cambio climático global – se sacude por las pérdidas de cosechas debido a intensas sequías en Estados Unidos. En algunas partes, aunque hay cosecha, no se puede usar porque por falta de lluvia las plantas no procesan los fertilizantes sintéticos y se vuelven tóxicas para el consumo. Todo está relacionado al mismo sistema industrial: semillas uniformes, sin biodiversidad, con agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, con alto uso de transportes, energía y petróleo – por tanto gran emisor de gases de efecto invernadero – y controlado por transnacionales.

En el caso del maíz, la escasez se exagera porque 40 por ciento de la producción en Estados Unidos se destina a etanol, es decir, a alimentar autos en lugar de gente.

Al ser Estados Unidos uno de los principales exportadores mundiales de maíz, soya y trigo, junto al hecho de que 80 por ciento de la distribución global de cereales está en manos de cuatro multinacionales que gestionan el abasto para obtener más lucros, la baja de producción en ese país tiene efecto dominó sobre el mercado global, donde los precios de los alimentos están disparados.

Los que más sufren por los aumentos de precios son los más pobres, principalmente los urbanos, que usan 60 por ciento de sus ingresos en alimentos.

Por el contrario, la veintena de transnacionales que controlan el sistema alimentario agroindustrial (de Monsanto a Wal Mart, pasando por Cargill, ADM, Nestlé y algunas más), las que controlan las semillas y pies de cría, los agrotóxicos, la compra, distribución y almacenamiento de granos (también para biocombustibles), los procesadores de carnes, alimentos y bebidas, así como los supermercados, son los responsables de las crisis, pero se han *blindado* contra sus efectos – trasladando las pérdidas a los productores chicos, a los consumidores y al gasto público. Para ellas, el caos climático y la escasez no significan pérdidas, sino aumento de ganancias, como sucede con las semillas, agrotóxicos y fertilizantes que se vuelven a vender, o las empresas que almacenan cereales, los acaparan y especulan vendiéndolos más caros, o los productos en supermercados, cuyo precio aumenta mucho más que la proporción al inicio de la cadena.

El caso del maíz en México es ilustrativo. Pese a que los agricultores del norte del país afirman tener 2 millones de toneladas para vender, recientemente se importaron 1.5 millones de toneladas de Estados Unidos (transgénico), y por otra parte venderá 150 mil toneladas a El Salvador y otra partida a Venezuela. Anteriormente había comprado medio millón de toneladas a Sudáfrica. Absurdo para el clima, por los transportes innecesarios, y brutal contra la producción nacional. Cuestionado, el Secretario de Economía, Bruno Ferrari (anteriormente funcionario de Monsanto), se lavó las manos, alegando que es una decisión de empresas privadas.

El trasfondo, como explica Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Campo Mexicano (Ceccam), es que en el contexto de las políticas para liberalizar la producción agrícola nacional que precedieron a la firma del TLCAN, se dismanteló la paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), que equilibraba el comercio interno de maíz, entregando el mercado interno a las transnacionales: empresas como Cargill, ADM, Corn Products International, junto a grandes porcícolas, avícolas y de procesamiento industrial de tortillas. Éstas compran a quien les convenga, sea porque es más barato o por otras razones, como comprar a agricultores con los que tienen contratos de producción en Estados Unidos.

Ese tipo de empresas – y sus ex funcionarios en el gobierno, como Ferrari – son las que afirman que hay que importar maíz, porque la producción nacional no es suficiente. Sin embargo, México ha producido en los últimos años alrededor de 22 millones de toneladas anuales, y el consumo humano es de unos 11 millones. Se usan en derivados industriales otros 4 millones de toneladas, restando aún 7 millones. Pero las empresas importan 8-9 millones de toneladas anuales adicionales, porque se usan 16 millones de toneladas de maíz en la cría industrial masiva de aves y cerdos –también de grandes empresas.

Si la cría fuera descentralizada y con forrajes diversos se tendría suficiente producción, sin epidemias y sin maíz transgénico de transnacionales, con muchas más fuentes de trabajo rural. La

importación de maíz a México no es necesaria, es sencillamente un negocio entre trasnacionales, condonado y subsidiado por el gobierno.

Si las políticas públicas protegieran la producción agrícola y pecuaria diversa y de pequeña escala, con semillas propias y públicas nacionales, se diversificarían los riesgos –incluso climáticos – y tendríamos producción alimentaria suficiente, accesible y de mucho mejor calidad.

Informa: Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

NICARAGUA

NICARAGUA: 180 MILLONARIOS

Según el Informe Mundial de Ultra Riqueza 2011-2012, que elabora la empresa Wealth-X, en Nicaragua hay 180 “ultra ricos” que poseen al menos fortunas personales de al menos 30 millones de dólares cada uno. Nicaragua supera a los ultra ricos de El Salvador (son 140). Y es superada en Centroamérica por Honduras (185) y Guatemala (310). No aparecen cifras de Costa Rica y Panamá. Brasil tiene el récord en América Latina (4,725 ultra ricos), ocupando el tercer lugar entre los países del mundo investigados. Le sigue México (1,900 ultra ricos, más que los que hay en todo el continente africano). América Latina, la región más desigual del planeta, tiene el 8% del total de ultra ricos del mundo. Naturalmente, el informe no brinda nombres de estos millonarios.

POLICÍA PIDE PERDÓN

El 13 de julio, en una reunión con trabajadoras sexuales que celebraban su cuarto encuentro nacional, la Jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, les habló con estas palabras: “Quiero pedirles perdón en nombre de la Policía Nacional por el irrespeto y los vejámenes a que muchas de ustedes se han visto sometidas por algunos de nuestros compañeros policías... Como mujer y como directora de la Policía Nacional me siento avergonzada de la actitud de algunos de estos compañeros. Puedo asegurarles que sus palabras, su sufrimiento, sus experiencias no van a quedar en el vacío y que sus demandas de seguridad van a encontrar una respuesta”. Según un informe presentado en el encuentro, elaborado por ONG en cinco lugares de Nicaragua, el 77% de estas mujeres está en esa vida por necesidad económica, el 95% la dejaría si obtuviera un empleo y el 14% reconoció haber sido víctima de abuso sexual siendo niñas.

BASURERO LA CHURECA

El 12 de julio el embajador de España en Nicaragua, León de la Torre, entregó a la Alcaldía de Managua 42 hectáreas del basurero La Chureca ya rellenas y selladas después de años de trabajo financiado por la cooperación española, que dará continuidad a este proyecto, con la construcción de viviendas, centro de salud y una planta de reciclaje que empleará a las 258 familias que trabajan en este gigantesco vertedero de basura. Juan Mariscal, coordinador de la agencia de cooperación española, dijo que este proyecto es el más costoso (40 millones de euros) desarrollado por la cooperación internacional de España en cualquier otro lugar del mundo.

Tomado de <http://www.envio.org.ni/articulo/4565>

PANAMÁ

PANAMÁ: “REGÁÑEME MI GENERAL” NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL PRD. MARTINELLI FESTEJA

No me referiré al circo que fue el Congreso del PRD, a las riñas, los abucheos, los discursos, los atrasos en el conteo pese al supuesto moderno sistema electrónico que se implantó.

Como habíamos analizado, Juan Carlos Navarro se alzó con la Secretaría General del PRD y todos los cargos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de dicho partido en franca decadencia.

Navarro, quien se apoda el Bin Bin (una pequeño pájaro), también es conocido por su frase "Regáñeme mi General" contenida en la carta que escribió cuando era estudiante donde idolatraba al dictador Manuel Antonio Noriega: "Si me porto mal, *regáñeme mi general*".

El triunfo de Juan Carlos Navarro significa también una victoria para Ricardo Martinelli. Un cable de Wikileaks de finales de 2008 reveló que Juan Carlos Navarro tocó las puertas de Martinelli al perder ese año las primarias del PRD ante Balbina Herrera. Navarro y Martinelli fraguaron un plan que consistía en contribuir a que el PRD perdiera las elecciones de 2009 y despejar el camino para que Navarro fuera el candidato de dicho partido en el 2014. A cambio Martinelli aseguraría para él y los suyos impunidad absoluta y el control de determinadas cuotas del poder de llegar Navarro a la Presidencia.

Martinelli no quiso responder a cuestionamientos de los periodistas sobre el tema en la víspera del Congreso del PRD, pero se presentó vestido de sweter azul, el color de la campaña de Navarro.

Es sabido que las fuertes sumas de dinero para financiar la costosa campaña de Navarro provinieron de allegados de Martinelli como Pipo Virzy, Gabriel Btsh, el Mello Alemán, Davis Ochy y del propio mandatario.

El Congreso del PRD se trató de un verdadero circo y una vulgar subasta pública tal como habíamos advertido. El Directorio celebrado un día antes fue escenario de riñas entre los copartidarios que se repitieron a lo largo de la jornada del Congreso en la Arena Roberto Durán.

Este el partido que se le ha pretendido vender al pueblo como el más grande y democrático, donde supuestamente no hay dueños.

El PRD es el padre del clientelismo político emulado hoy por Cambio Democrático de Martinelli. Un partido de intrigas, traiciones y zancadillas permanentes.

Ahora Martinelli apunta sus cañones hacia el Partido Panameñista. En su plan para tomárselo también ya tiene su ficha, Mireya Moscoso.

Los resultados del Congreso del PRD representan un duro golpe para el Frente Guacho, que se vio obligado a posponer una marcha que tenían programada el pasado 22 de agosto.

Cansado de esta podredumbre moral, de este clientelismo vergonzoso, de esta partidocracia aberrante, sigo insistiendo en la necesidad de inscribir el instrumento político electoral del pueblo, el **Frente Amplio por la Democracia (FAD)**, el único y verdadero.

Artículo completo en: <http://www.kaosenlared.net>

PUERTO RICO

SE PREPARAN LOS BANDOS PARA BATALLA POLÍTICA ESTRATÉGICA

El crecimiento de la maquinaria electoral del Partido Independentista Puertorriqueño se está combinando con el entusiasmo de los nuevos partidos pequeños mientras se ha deteriorado la capacidad de convocatoria de los líderes máximos pro Estados Unidos y las agencias estadounidenses incrementan el recogido de información de inteligencia.

Tal es el cuadro a menos de 70 días de que la población de esta nación isleña del noreste del Caribe acuda a las urnas para, por primera vez, votar sobre si consciente o rechaza formalmente su condición de colonia de EEUU, evento que podría tener efectos aún no medidos en los demás territorios coloniales que quedan en el archipiélago de las Antillas.

Buena parte de la información disponible para el análisis surge del intento fallido del 19 de agosto, en el que los presidentes del oficialista Partido Nuevo Progresista y del opositor Partido Popular Democrático trataron de convencer al país de renunciar al derecho absoluto a la fianza y de aceptar una legislatura más pequeña y de más difícil acceso para los sectores minoritarios. Apenas el 15,7 por ciento de los electores inscritos votaron SÍ, lo que sirvió para ganar en sólo 14 municipios mientras prácticamente todo el país fue arrojado por el NO.

Pero el triunfo extendido del NO fue con la participación de apenas 19,2 por ciento de los electores inscritos, mientras la inmensa mayoría del pueblo permaneció neutral a la contienda. Contrario a las participaciones masivas típica de ese tipo de consulta durante el siglo XX, las dos consultas del nuevo siglo han tenido la característica de la participación baja, con 22 por ciento en la de 2005 sobre el sistema unicameral y 35,4 en la más reciente.

El voto NO se concentró en el área metropolitana, donde obtuvo el 55,6 por ciento de todos sus sufragios, que sumaron poco más de 443.000, cantidad muy similar a la obtenida en 2005, cuando los proponentes del sistema de una sola cámara lograron 456.257, pero de los cuales sólo el 32,7 por ciento se provino del área metropolitana. Esa conversión del área metropolitana en reducto de movilización liberal también tuvo su componente de clase social, pues aunque el voto NO ganaba por prácticamente todos lados, en vecindarios de clase media alta se registró participación de hasta casi 60 por ciento, mientras en proyectos de vivienda pública para pobres –aquí conocidos como “caseríos”- la participación llegó a ser tan baja como 21 y 19 por ciento.

Todo apunta a un debilitamiento general del sistema de participación democrática, de la institucionalidad política y del alcance de las instituciones en general. La situación es cónsona con la tendencia a bajar en la participación electoral, que en los comicios generales de 1992 fue de 84,5 de los votantes, en 1996 bajó a 82,7, en el año 2000 de 82,2, en 2004 siguió bajando a 81,6 y en 2008, 79,05.

Para el PIP, la consulta sirvió a los fines de organizar su ejército electoral y logró enviar cerca de 2.000 voluntarios a cubrir casi todas las mesas de votación de los pueblos pequeños del interior y las costas, además asignar 1.000 o más a las ciudades y así llegó a poder cubrir cerca del 85 por ciento de las mesas en San Juan. De esa forma, la pequeña aunque influyente formación partidaria, ya tiene más funcionarios de los que tuvo para los comicios generales de 2008 y todavía le quedan meses para reforzar sus tropas.

Cuando el PIP perdió el caso en el Tribunal Supremo para detener el referéndum, su candidato a Gobernador Juan Dalmau, proclamó “ahora le toca al pueblo”, pero entonces pocos se sentían seguros de tal llamado. Luego de la victoria, el presidente del PIP, Rubén Berríos, dijo que en noviembre se producirá “la alianza de las alianzas”, esta vez porque los votos para quitar el consentimiento a la colonia vendrán de los sectores más diversos.

Pero el alineamiento de las fuerzas está cambiando rápidamente.

Para el voto NO, se produjo una alianza de hecho, a ratos un tanto incómoda, entre el PIP y los partidos emergentes –el Partido del Pueblo Trabajador, el Movimiento Unión Soberanista y Puertorriqueños Por Puerto Rico- líderes importantes del partido autonomista, la jefatura de las iglesias católica y protestantes, el Movimiento Socialista Popular, el Frente Socialista, la Organización Socialista Internacional y toda una gama de grupos sociales y gremiales. Fue una campaña con gran despliegue de creatividad mientras el partido oficialista gastaba millones de dólares en publicidad por el Sí.

Para la consulta de noviembre, que coincide con las elecciones generales, la jefatura del PNP pedirá el voto NO a la colonia y a favor de la estadidad mientras el PPD quiere el voto Sí y abstención sobre las alternativas, el grupo ALAS irá por el NO en la primera y “Estado Libre Asociado Soberano”, mientras el PIP quiere NO a la colonia y a favor de la independencia. De los partidos emergentes y los grupos de izquierda, el MUS promueve la abstención y todavía no está claro el resto del panorama.

Por parte de EEUU, el papel más visible lo juegan las agencias de inteligencia y sus contratistas, en donde también hay presencia significativa puertorriqueña. En el aeropuerto internacional ya es rutina confiscar información escrita y electrónica a izquierdistas, como fue el caso de la detención reciente de militantes del Partido Nacionalista y el Frente Socialista, que fueron interrogados por varias horas.

Mientras tanto, el contratista de seguridad e inteligencia MVM, empresa fundada por un puertorriqueño de New Jersey descendiente de una familia de Mayagüez, está reclutando traductores en Puerto Rico.

Para completar el cuadro con los tintes del realismo mágico de la literatura que nunca faltan en Puerto Rico, el activista ambiental Alberto de Jesús, conocido como Tito Kayak, anunció la reanudación de su “travesía admirable” por las islas del Caribe en reclamo de la excarcelación de Oscar López Rivera, que había tenido que interrumpir por el fallecimiento de su padre. López Rivera lleva más de 30 años preso por vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, formación armada que el Buró Federal de Investigaciones insiste que sigue operando en combinación con el Ejército Popular Boricua-Macheteros.

Fuente: Jesús Dávila. Alainet

VENEZUELA

POR QUÉ VENEZUELA SE RETIRA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

El 28 de julio de 2012, el presidente Hugo Chávez hizo partícipe de su decisión de retirarse de la Comisión Interamericana de los derechos humanos, tras el fallo que condena a Venezuela por malos tratos a un detenido sancionado por terrorismo y que se fugó a Estados Unidos. Caracas denuncia un veredicto político.

El 24 de julio de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de condenar al Estado venezolano por ser “ internacionalmente responsable de la violación del derecho a la integridad personal y por los tratos inhumanos y degradantes en perjuicio del señor Raúl José Díaz Peña”. La instancia juzgó que “su detención habría sido ilegal y arbitraria y habría estado sometido a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, invocando una presunción de peligro de fuga”. La CIDH también condenó al Estado venezolana a indemnizar a Díaz Peña con 15.000 dólares.

¿Quién es Raúl José Díaz Peña?

Raúl José Díaz Peña es un prófugo venezolano de la justicia severamente sancionado por los tribunales por terrorismo y refugiado en Estados Unidos. En 2003, Venezuela vivía una situación de polarización política extrema tras el golpe de Estado abortado contra el presidente democráticamente elegido Hugo Chávez y el sabotaje petrolero que costó a la economía venezolana la suma de 10.000 millones de dólares. Ambos fueron organizados por la oposición con el apoyo explícito de Estados Unidos que había reconocido a la junta golpista de Pedro Carmona Estanga, entonces presidente de Fedecámaras –organización que agrupa los intereses económicos del país– y actualmente refugiado en Colombia.

El 25 de febrero de 2003, una facción radical de la oposición compuesta por Felipe Rodríguez, José Colina Pulido, Germán Varela López, Silvio Mérida y Raúl José Díaz Peña, decidida a derrocar a Hugo Chávez, colocó varias bombas en el Consulado General de la República de Colombia y en la Embajada de España. El objetivo era acusar de los atentados terroristas a los partidarios del presidente venezolano, los cuales habrían actuado en represalia por la decisión de Bogotá y de Madrid de reconocer a la efímera junta golpista de abril de 2002..

No obstante el plan fracasó, pues las autoridades del país arrestaron a Díaz Peña y a sus cómplices ese mismo día. Tras su juicio, el 29 de abril de 2008, la justicia venezolana lo condenó en primera instancia a 9 años y 4 meses de cárcel por terrorismo. En mayo de 2012, un juez decidió conceder un régimen de semi-libertad a Díaz Peña y le permitió pasar los fines de semana con su familia y ejercer una actividad profesional. En septiembre de 2010, Díaz Peña huyó y se refugió en Estados Unidos.

¿La CIDH, una jurisdicción independiente?

Órgano jurídico de la Organización de Estados Americanos, entidad bajo fuerte influencia de Estados Unidos –hasta el punto de que los países de América Latina y el Caribe decidieron crear la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en diciembre de 2011 con el fin de emanciparse de la sombra tutelar de Washington y de su fiel aliado canadiense–, la CIDH es sospechosa de parcialidad hacia los gobiernos de izquierda en América Latina.

Así, contra todo pronóstico, a partir de 2005 la CIDH aceptó estudiar el caso de Díaz Peña a petición de la Venezuela Awareness Foundation, una organización de la oposición a Hugo Chávez. Ahora bien, para poder analizar un asunto, los estatutos de la entidad interamericana estipulan que se deben agotar primero todos los recursos jurídicos del país de origen, lo que no es el caso para Díaz Peña. Es la primera vez en la historia de la justicia interamericana que la CIDH acepta estudiar el caso de un individuo condenado por terrorismo en su propio país, prófugo de justicia y cuyo juicio sigue abierto, en violación de su propia Convención. Hasta hoy, la CIDH no ha dado explicaciones al respecto..

Nicolás Maduro, canciller venezolano, expresó su consternación y anunció que su país se retiraría de la organización. “Es lamentable haber tenido que dar este paso, pero Venezuela se ha visto obligada, dadas las decisiones aberrantes y abusivas que se han tomado contra nuestro país durante 10 años. Ningún país de Europa ni Estados Unidos aceptarían que la CIDH protegiera a un terrorista”, declaró. La diplomacia venezolana acusa a la entidad de “complicidad con la política de Washington de protección a los terroristas” y exigió “que apliquen los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos.

[Salim Lamrani](#) - Opera Mundi